RECOMENDACIÓN N.º. 54/96

EXP. No. CODHEM/1976/95-2
Toluca, México, agosto 19, 1996.

*RECOMENDACIÓN EN EL CASO DEL SEÑOR
JORGE YÁÑEZ ROSALÍO.*

*LIC. LUIS ARTURO AGUILAR BASURTO.
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE MÉXICO.*

Muy distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con fundamento en los artículos 102 Apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 4, 5 fracciones I, II y III, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, ha examinado diversos elementos relacionados con la queja presentada por el señor Jorge Yáñez Rosalío, en atención a los siguientes:

I. HECHOS

1. En fecha 5 de junio de 1995, se recibió en este Organismo escrito de queja del señor Jorge Yáñez Rosalío, quien manifestó:

"En el año de 1993 fui demandado por el señor Alberto Sansores Manzanilla, por diversos delitos, correspondiéndole [a la averiguación previa] el número TLA/III/8128/93,

misma que el 4 de febrero de 1994 fue determinada por el Subprocurador con ponencia de no ejercicio de acción penal. Es el caso que recientemente me enteré que nuevamente fui demandado por los mismos delitos por el mismo denunciante levantándose el acta TLA/I/5292/94, misma que fue consignada y además al hacer del conocimiento del Ministerio Público que ya había otra con determinación de no ejercicio de la acción penal, ese funcionario sustrajo las hojas de no ejercicio de la acción penal de la averiguación (que estaba en archivo), [por lo que] exhibo copias de tal determinación.

Continúa narrando: "... quiero señalar que existe un juicio de usucapión en donde también intentó denunciarme por los mismos delitos pero el Ministerio Público adscrito dijo al Juez que no procedía tal acción penal de los hechos que se narraron, [este juicio tiene el número de] expediente 1735/92-3 en el Juzgado 1º Civil de Tlalnepantla."

Finalmente apunta: "De la averiguación previa número TLA/I/5292/94, sin haberme citado para declarar y violando el artículo 172 del Código de Procedimientos Penales, fue consignada al Juzgado Segundo Penal de Tlalnepantla con cede en

Barrientos, tocándole el número de causa penal 124/95-1."A su escrito, el quejoso anexo copia simple de los siguientes documentos:

a) Escrito del señor Alberto Sansores Manzanilla, de fecha 14 de noviembre de 1994, a través del cual plantea incidente criminal de falsificación de documentos y uso de documentos falsos, en el juicio ordinario civil número 1735/92, promovido por Jorge Yáñez Rosalío en contra de la persona precitada, en el Juzgado Primero de lo Civil de Tlalnepantla, México.

b) Oficio 211-008 de fecha 12 de enero de 1995, mediante el cual el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado referido, desahogó la vista que le fuera notificada en el expediente 1735/92, señalando que esa Representación Social considera inexistentes los delitos denunciados por Alberto Sansores Manzanilla, en el escrito del incidente planteado.

c) Escrito de fecha 17 de noviembre de 1993, dirigido al Procurador General de Justicia del Estado, mediante el cual Alberto Sansores Manzanilla denuncia hechos presumiblemente constitutivos de delito cometidos por Jorge Yáñez Rosalío.

d) Acuerdo ministerial de fecha 7 de enero de 1994, a través del cual se envía la indagatoria TLA/III/8128/93 al Procurador General de Justicia de esta Entidad, para efectos del artículo 125 de la ley Adjetiva Penal vigente.

e) Oficio sin número de fecha 4 de febrero de 1994, por el cual los agentes del Ministerio Público auxiliares del Procurador General de Justicia del Estado de México, consideran procedente el no ejercicio de la acción penal.

f) Oficio sin número de la misma fecha, en el cual el Lic. Francisco Lozada Chávez, entonces Subprocurador de Justicia con residencia en Tlalnepantla, México, autoriza el no ejercicio de acción penal en la averiguación previa TLA/III/8128/93.

g) Escrito de fecha 20 de julio de 1994, mediante el cual Alberto Sansores Manzanilla denuncia hechos presuntamente constitutivos de delito cometidos por el señor Jorge Yáñez Rosalío, dirigido al Subprocurador de Justicia con sede en Tlalnepantla, México.

2. En fecha 5 de junio de 1995, se registra y califica la queja, asignándole el número de expediente CODHEM/1976/95-2.

3. Mediante Oficios 4493/95-2 y 4494/95-2 de fecha 6 de junio de 1995, se comunicó al señor Jorge Yáñez Rosalío la recepción y admisión de su escrito de inconformidad.

4. A través de oficio 4496/95-2 de fecha 6 de junio de 1995, se solicitó al Lic. Luis Rivera Montes de Oca, entonces Procurador General de Justicia del Estado de México, informe detallado sobre los hechos que motivaron la

queja, así como copias certificadas de la averiguación previa TLA/III/8128/93.

5. Por oficio 4495/95-2 de la misma fecha, se instó del Lic. Luis Miranda Cardoso, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en vía de colaboración, copia certificada de la causa 124/95-1 tramitada en el Juzgado Segundo Penal de Tlalnepantla, México.

6. En oficio 004110 de fecha 26 de junio de 1995, el Tribunal Superior de Justicia del Estado remitió copias certificadas de la denuncia formulada por Alberto Sansores Manzanilla, así como dictámenes en materia de grafoscopía rendidos por Antonio Flores Mota y Adriana Patricia Barrios Solís, agregando el informe rendido por el Juez Segundo Penal de Tlalnepantla, México.

En éste último se señala: "... efectivamente se encuentra radicada en éste Juzgado a mi cargo la causa penal número 124/95-1, en la cual al considerar que se encontraban reunidos los extremos del artículo 16 de la Constitución General de la República, con fecha 10 de mayo del presente año [1995], se dictó orden de aprehensión, en contra de Jorge Yáñez Rosalío, por aparecer como probable responsable de la comisión del delito de uso de documento falso, cometido en agravio de la fe pública, y a la fecha no se ha ejecutado en su aspecto material dicha orden de aprehensión ..."

8. Mediante oficio CDH/PROC/211/01/2514/95 de fecha 20 de julio de 1995, el Lic. Luis Rivera Montes de Oca rindió el informe solicitado, exponiendo: "El acta de averiguación previa número TLA/III/8128/93, relativa a una denuncia de hechos presumiblemente constitutivos de delito, en agravio de Alberto Sansores Manzanilla, fue determinada con ponencia de archivo y autorizada ésta el 4 de febrero de 1994, notificándosele al quejoso el 5 de enero del presente año... Asimismo, le comunico que el señor Yáñez Rosalío, se vio involucrado con carácter de indiciado en el acta TLA/I/5292/95, por el delito de uso de documento falso o alterado, consignada el 20 de abril del año en curso". A este oficio se anexaron copias de las últimas actuaciones de la indagatoria citada al final.

9. Por medio de oficio de fecha 24 de julio de 1995, se comunicó al señor Jorge Yáñez Rosalío el contenido de los informes rendidos por el Tribunal Superior de Justicia del Estado y la Procuraduría General de Justicia de esta Entidad.

10. En fecha 10 de agosto de 1995, el oficio referido en el punto que precede fue notificado personalmente al señor Jorge Yáñez Rosalío, manifestando en el acto mismo de la diligencia que se continuara con el trámite de su queja.

11. A través de oficios 6504/95-2 y 7077/95-2 de fechas 9 y 30 de agosto de 1995, se pidió al Lic. Luis Rivera Montes de Oca copia certificada de

todas las actuaciones contenidas en las indagatorias TLA/I/5292/94 y TLA/III/8128/93.

12. En oficios 6644/95-2 y 7076/95-2 del 11 y 30 de agosto de 1995, se solicitó al Lic. Luis Miranda Cardoso, en vía de colaboración, copia certificada completa de la causa 124/95-1.

13. A través de oficio CDH/211/01/3432/95 se remitió por parte de esa Procuraduría, copia certificada de la indagatoria TLA/III/8128/93.

De las actuaciones de ésta la averiguación previa se obtuvieron los datos siguientes:

a) En fecha 19 de noviembre de 1993 el agente del Ministerio Público adscrito al tercer turno de Tlalnepantla, México, recibió escrito de Alberto Sansores Manzanilla denunciando hechos cometidos en su agravio y en contra del señor Jorge Yáñez Rosalío, asignándole el número de indagatoria TLA/III/8128/93.

b) El día primero de diciembre de 1993, a través de comparecencia voluntaria, el señor Alberto Sansores Manzanilla ratificó su escrito de denuncia.

c) En fecha 28 de diciembre de 1993, el señor Jorge Yáñez Rosalío compareció en forma voluntaria ante la Representación Social, vertiendo su declaración en torno a los hechos.

d) El día 7 de enero de 1994 el agente del Ministerio Público acordó: "Visto el

estado que guardan las presentes diligencias de averiguación previa y después de un estudio minucioso de las constancias que lo integran, se desprende que de la declaración del C. Jorge Yáñez Rosalío, en donde ha exhibido copias certificadas del Juicio de Usucapión, en donde ya causó sentencia ejecutoria, en donde le resultara favorable como único propietario y poseedor del bien inmueble ubicado en lote cuatro manzana seis, del fraccionamiento tabla honda, San Bartolo Tenayuca, Tlalnepantla, Estado de México, e inscribiéndose en el registro público de la propiedad, por lo que resulta de todo lo actuado y exhibido que se trata de un asunto puramente civil, por lo que nos encontramos dentro de lo dispuesto por el artículo 169 fracción I, del Código de Procedimientos Penales vigente en la Entidad, por lo que originales y copias de todo lo actuado remítanse al C. Procurador General de Justicia del Estado de México, para los efectos del artículo 125 del Ordenamiento Jurídico arriba citado ..."

e) En fecha 4 de febrero de 1994, a través de oficio dirigido al Procurador General de Justicia, los Lics. Eduardo Aguilar Palacios y Hugo Sánchez Barrera, agentes del Ministerio Público auxiliares del precitado Procurador General señalan: "En virtud que los hechos que motivaron la presente averiguación previa [TLA/III/8128/93] no constituyen delito, es procedente autorizar el no ejercicio de la acción penal en los términos de la fracción I

del artículo 169 del Código de Procedimientos Penales."

f) Por oficio de la misma fecha, el Lic. Francisco Lozada Chávez, entonces Subprocurador de Justicia de Tlalnepantla, México, remite al Director General de Averiguaciones Previas de esa Procuraduría, la indagatoria TLA/III/8128/93, en la que se anota: "Habiendo oído el parecer de los CC. Agentes del Ministerio Público Auxiliares, he resuelto autorizar el no ejercicio de la acción penal, con fundamento en el artículo 169 fracción I ..." de la Ley Adjetiva Penal.

14. Mediante oficio 005714 de fecha 7 de septiembre de 1995, el Tribunal Superior de Justicia envió copia certificada de la causa 124/95-1.

De ésta, se obtuvieron los siguientes datos:

a) En fecha 20 de julio de 1994, el agente del Ministerio Público adscrito a la mesa cuatro, primer turno, de Tlalnepantla, México, recibió escrito signado por el señor Alberto Sansores Manzanilla, en el cual denuncia hechos presuntamente constitutivos de delito en contra de Jorge Yáñez Rosalío, dándose inicio a la averiguación previa TLA/I/5292/94.

b) El día tres de agosto de 1994, el señor Alberto Sansores Manzanilla, en comparecencia voluntaria, acudió a ratificar su escrito ante la Representación Social, agregando copias certificadas de la indagatoria

TLA/III/8128/93 constante de 28 fojas; dictamen pericial en grafoscopia de fecha 15 de julio de 1994 firmado por Antonio Flores Mota; y copia certificada del juicio de amparo 972/93 seguido en el entonces Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, entre otros documentos.

c) En 26 de enero de 1995, el agente del Ministerio Público solicita al Delegado de Servicios Periciales en Tlalnepantla, México, la designación de perito en materia de grafoscopia. El día 13 de marzo de 1995, se recibe y agrega el dictamen signado por Adriana Patricia Barrios Solís.

En el dictamen fundamentalmente se refiere:

- "Descripción del documento cuestionado: Correspondió a un contrato privado de promesa de venta fechado a los quince días del mes de enero de mil novecientos ochenta y tres, localizando la firma que se cuestiona en el espacio destinado al 'promoviente vendedor' (sic) documento que consta en dos hojas en tamaño oficio, en llenado mecanográfico, documento que tuve a la vista en copia fotostática."

- "Conclusión: No procede por su ejecución al mismo origen gráfico del C. Alberto Sansores Manzanilla, la firma que obra en el espacio destinado a 'promitente vendedor' en un contrato de promesa de venta fechado el día 15 de enero de 1983.

Conclusión que queda a ratificación o rectificación al momento que se proporcione el documento original."

d) En fecha 20 de abril de 1995, el agente del Ministerio Público produjo su determinación, ejercitando acción penal en contra de Jorge Yáñez Rosalío, por el delito de uso de documento falso, en base a las siguientes argumentaciones:

- "Elementos del tipo penal del delito de uso de documento falso, se encuentran debidamente acreditado en actuaciones ... con los siguientes elementos de prueba: a) Con la denuncia presentada por Alberto Sansores Manzanilla, en contra de Jorge Yáñez Rosalío. b) Con la ratificación a la denuncia realizada por el mismo denunciante. c) Con la fe ministerial de documentos ... en donde se da fe, entre otros documentos, de las copias debidamente certificadas del juicio de amparo ... 972/93, seguido en el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, promovido por Alberto Sansores Manzanilla y en el que obra copia del contrato privado de promesa de compraventa, supuestamente suscrito y firmado por lo señores Alberto Sansores Manzanilla y Jorge Yáñez Rosalío, promitente vendedor y promitente comprador, respectivamente; respecto del inmueble ubicado en el lote número cuatro, de la manzana seis, de la colonia tabla honda, San Bartolo Tenayuca, Tlalnepantla, Estado de México. d) Con el dictamen en materia de grafoscopía de fecha siete de marzo

del año en curso, suscrito y firmado por la perito Adriana Patricia Barrios Solís... e) Con el dictamen en materia de grafoscopía de fecha quince de julio de mil novecientos noventa y cuatro, suscrito y firmado por el perito grafoscopista Antonio Flores Mata ... f) De la fe ministerial de documentos ... se desprenden las copias certificadas de la averiguación previa marcadas con el número TLA/III/8128/93, de la que se desprende la declaración del señor ... Jorge Yáñez Rosalío, ubicándose en lugar, tiempo y persona."

- "Probable responsabilidad penal de Jorge Yáñez Rosalío, se encuentra debidamente acreditada en actuaciones con todos y cada uno de los elementos de probanza que sirvieron de base para la comprobación de los elementos del tipo penal ya enumerados en el presente, pero en forma por demás especial, con la imputación firme y directa que hace Alberto Sansores Manzanilla en contra de Jorge Yáñez Rosalío, como la persona que utilizando un contrato de promesa de compraventa, supuestamente suscrito y firmado por el denunciante, pretende apropiarse de un inmueble del que no tiene derecho ... del dictamen en materia de grafoscopía emitido por perito de esta institución, se desprende que el multicitado contrato de promesa de compraventa, nunca fue firmado por el señor Alberto Sansores Manzanilla ..."

e) El día 8 de mayo de 1995, el Juez Segundo Penal de Tlalnepantla,

México, dictó auto de radicación, registrándose con el número de proceso 124/95-1.

f) En fecha 10 de mayo de 1995, el Juez de la causa dictó orden de aprehensión en contra de Jorge Yáñez Rosalío.

15. Mediante oficio CDH/PROC/211/01/3246/95 de fecha 13 de septiembre de 1995, esa Procuraduría General de Justicia del Estado envió copia certificada de la averiguación previa TLA/I/5292/94.

16. El día 3 de octubre de 1995 por oficio 8302/95-2, este Organismo comunicó al señor Jorge Yáñez Rosalío la remisión al archivo del presente expediente de queja por no acreditarse violaciones a derechos humanos.

17. En la misma fecha, a través de oficios 8303/95-2 y 8304/95-2 se participó a usted, en su calidad de Procurador General de Justicia y al Lic. Luis Miranda Cardoso, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, respectivamente, el acuerdo que antecede.

18. A través de comparecencia voluntaria de fecha 9 de octubre de 1995, el señor Jorge Yáñez Rosalío solicitó la reapertura del expediente de queja, produciendo además diversas manifestaciones, petición que fue acordada favorablemente.

19. Mediante los oficios 8587/95-2 y 8588/95-2 de fecha 10 de octubre de

1995, se comunicó a esa Procuraduría y al Tribunal Superior de Justicia del Estado, la reapertura del expediente.

20. Por comparecencia voluntaria del 18 de diciembre de 1995, el señor Jorge Yáñez Rosalío manifestó a este Organismo haber interpuesto juicio de garantías ante el ese entonces Juez Sexto de Distrito en el Estado de México, refiriendo como acto reclamado la orden de aprehensión dictada en la causa 124/95-1 por el Juez Segundo de lo Penal de Tlalnepantla, México, y su ejecución, señalando como autoridades responsables al Juez precitado, a esa Procuraduría General de Justicia y al Subprocurador de Justicia con residencia en Tlalnepantla, México, entre otras, juicio que le correspondió el número 194/95; exhibiendo en el acto las siguientes documentales:

a) Copia certificada del informe justificado rendido en el juicio de amparo 149/95, por el Lic. Eduardo Miranda Ávila, entonces Subprocurador de Justicia con sede en Tlalnepantla, México, por el que manifiesta que se cierto el acto reclamado.

b) Copia certificada del oficio de fecha 9 de junio de 1995, a través del cual el precitado Subprocurador instruye al C. Abel Castro Banderas, Primer Comandante de la Policía Judicial del Valle de Cuautitlán, México, abstenerse de ejecutar la orden de aprehensión girada en contra del quejoso.

c) Copia certificada de las resoluciones interlocutorias de fechas 14 y 27 de junio de 1995, dictadas en el incidente de suspensión relativo al amparo en cita, mediante las cuales se concede al quejoso la suspensión definitiva de los actos reclamados dictados por las autoridades demandadas.

d) Copia simple del oficio OC.211.04.197.950 de fecha 14 de noviembre de 1995, por el cual la Subprocuraduría de Justicia con sede en Tlalnepantla, México, solicitó al Lic. Luis Conrado Flores Vázquez, Procurador General de Justicia del Estado de Aguascalientes, su colaboración para cumplir la orden de aprehensión dictada en contra de Jorge Yáñez Rosalío dictada por el Juez Segundo Penal de Tlalnepantla, México.

e) Escrito de fecha 15 de noviembre de 1995, por el cual el quejoso solicita al Lic. Luis Conrado Flores Vázquez copia certificada del oficio de colaboración por el que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México instó la ejecución de la orden de aprehensión.

f) Copia certificada del oficio 2112.3 de fecha 15 de noviembre de 1995, a través del cual el Lic. Luis Conrado Flores Vázquez dio contestación al escrito precitado, informando: "... efectivamente el suscrito, sí tuvo conocimiento de que el día 15 del presente mes, usted fue presentado ante el agente del Ministerio Público adscrito a la D.G. de la Policía Judicial

del Estado, por elementos de la policía judicial del Estado de México, en razón al oficio de colaboración OC.211.04.197.95 de fecha 14 del actual, enviado por la Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla, México; derivado de orden de aprehensión girada por el Juez Segundo Penal de Tlalnepantla, dentro de la causa penal núm. 124/95-1, ante lo cual usted presentó copia fotostática certificada de la suspensión definitiva concedida por el C. Juez Sexto de Distrito del Estado de México; por lo que se procedió a solicitar información a la Subprocuraduría que remitió el oficio de colaboración, así como al Juzgado 2/o de lo Penal de Tlalnepantla, sobre la vigencia de la orden de aprehensión antes referida, informándonos en forma negativa, por lo que no se registró su ingreso a los separos de la D.G. Pol. Jud."

21. Por oficio 286/96-2 de fecha 8 de enero de 1996, se solicitó a esa Procuraduría, informe relativo a la fecha en que esa Dependencia fue notificada de la suspensión provisional o definitiva dictada en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 194/95, seguido por el señor Jorge Yáñez Rosalío.

22. Mediante comparecencia de fecha 18 de enero de 1996, el quejoso aportó copia certificada de los documentos que a continuación se listan, relativos al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 194/95:

a) Oficio 2575 a través del cual se notificó la interlocutoria de fecha 14 de junio de 1995, recibido: en esa Procuraduría General de Justicia del Estado el 20 de junio de 1995; en la Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla, México, el 19 de junio de 1995; en la Dirección de la Policía Judicial del Estado de México, el 20 de junio de 1995.

b) Oficio 2741 por el cual se notificó la interlocutoria del 27 de junio de 1995, con fechas de recepción tanto en la Procuraduría General de Justicia del Estado como en la Dirección de la Policía Judicial, del 10 de julio de 1995.

23. Mediante oficio CDH/PROC/211/01/603/96 de fecha 7 de febrero de 1996, esa Procuraduría General de Justicia envió el informe solicitado en el similar 286/96-2 del 8 de enero del mismo año, informando:

"... debido al cambio de altos mandos en la Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla, se produjo un desajuste en el control administrativo de la Policía Judicial, lo cual condujo al oficio de colaboración dirigido al Procurador de Justicia del Estado de Aguascalientes y el traslado de dos elementos de nuestra corporación policiaca a esa entidad el 14 de noviembre de 1995."

Esa Dependencia continúa señalando: "... el oficio de colaboración de referencia se derivó de un error involuntario de carácter estrictamente administrativo, tal es así, que cuando los agentes investigadores ubicaron al

recurrente, informándole de la existencia de la orden judicial, éste externó la vigencia de la suspensión incidental definitiva, motivo por el cual, sin asegurarlo, se remitieron a las oficinas de la procuraduría de Aguascalientes, a fin de verificar su dicho ..."

Apuntando finalmente que "No obstante lo anterior, el error administrativo que desencadenó el traslado y la movilización de la policía judicial y la posterior alteración de la rutina diaria del presunto justiciable, hacen necesario tomar las medidas legales para su sanción, motivo por el que ordené el inicio del acta administrativa correspondiente, a efecto de determinar probable responsabilidad ..."

II. EVIDENCIAS

En el caso las constituyen:

1. Escrito de queja de fecha 5 de junio de 1995, mediante el cual el señor Jorge Yáñez Rosalío manifestó presuntas violaciones a derechos humanos, anexando diversos documentos.
2. Acuerdo de fecha 5 de junio de 1995, a través del cual se registró y calificó el escrito de inconformidad asignándole el número CODHEM/1976/95-2.
3. Oficios 4493/95-2 y 4494/95-2 de fecha 6 de junio de 1995, por los cuales se comunicó al señor Jorge Yáñez

Rosalío la recepción y admisión del escrito de queja.

4. Oficio 4496/95-2 de fecha 6 de junio de 1995, mediante el cual se solicitó al Lic. Luis Rivera Montes de Oca, entonces Procurador General de Justicia del Estado de México, informe detallado sobre los hechos que motivaron la queja, así como copias certificadas de la averiguación previa TLA/III/8128/93.

5. Oficio 4495/95-2 de la misma fecha, a través del cual se instó del Lic. Luis Miranda Cardoso, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en vía de colaboración, copias certificadas de la causa 124/95-1 tramitada en el Juzgado Segundo Penal de Tlalnepantla, México

7. Oficio 004110 de fecha 26 de junio de 1995, mediante el cual el Tribunal Superior de Justicia del Estado remitió copias certificadas de la denuncia formulada por Alberto Sansores Manzanilla, así como dictámenes en materia de grafoscopia e informe rendido por el Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Tlalnepantla, México.

8. Oficio CDH/PROC/211/01/2514/95 de fecha 20 de julio de 1995, a través del cual el Lic. Luis Rivera Montes de Oca rindió el informe solicitado.

9. Oficio de fecha 24 de julio de 1995, por el cual se comunicó al señor Jorge Yáñez Rosalío, el contenido de los

informes rendidos por el Tribunal Superior de Justicia del Estado y de la Procuraduría General de Justicia de esta Entidad, mismo que le fue notificado el 10 de agosto del mismo año.

10. Oficios 6504/95-2 y 7077/95-2 de fechas 9 y 30 de agosto de 1995, mediante los cuales se pidió al Lic. Luis Rivera Montes de Oca, copia certificada de todas las actuaciones contenidas en las indagatorias TLA/III/8128/93 y TLA/I/5292/94.

11. Oficios 6644/95-2 y 7076/95-2 del 11 y 30 de agosto de 1995, a través de los cuales se solicitó al Lic. Luis Miranda Cardoso, en vía de colaboración, copia certificada completa de la causa 124/95-1.

12. Oficio 005714 de fecha 7 de septiembre de 1995, por el cual el Tribunal Superior de Justicia envió las copias certificadas pretendidas.

13. Oficio CDH/PROC/211/01/3246/95 de fecha 13 de septiembre de 1995, mediante el cual esa Procuraduría General de Justicia envía copia certificada de la averiguación previa TLA/I/5292/94.

14. Oficio CDH/211/01/3432/95 de fecha 22 de septiembre de 1995, a través del cual esa Procuraduría remitió copia certificada de la indagatoria TLA/III/8128/93.

15. Oficio 8302/95-2 de fecha 3 de octubre de 1995, por el cual se

comunicó al señor Jorge Yáñez Rosalío la remisión al archivo de este expediente por no acreditarse violaciones a derechos humanos.

16. Oficios 8303/95-2 y 8304/95-2 de fechas 3 de octubre de 1995, por medio de los cuales se participó a esa Procuraduría General de Justicia y al Tribunal Superior de Justicia del Estado, respectivamente, el acuerdo que antecede.

17. Acta circunstanciada de fecha 9 de octubre de 1995, a través del cual se hace constar la comparecencia voluntaria del señor Jorge Yáñez Rosalío solicitando la reapertura del expediente de queja, comprometiéndose a aportar nuevos elementos de convicción que evidenciaran la violación a derechos humanos.

18. Oficios 8587/95-2 y 8588/95-2 de fecha 10 de octubre de 1995, por los cuales se comunicó a esa Procuraduría y al Tribunal Superior de Justicia de la Entidad, la reapertura del expediente.

19. Acta circunstanciada fechada el 18 de diciembre de 1995, mediante la cual se asientan diversas manifestaciones del quejoso y exhibe varias documentales.

20. Copia certificada de las resoluciones interlocutorias de fechas 14 y 27 de junio de 1995, dictadas en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 194/95, promovido

por Jorge Yáñez Rosalío mediante el cual se concede al quejoso la suspensión definitiva de los actos reclamados dictados por el Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México, Procurador General, Subprocurador de Justicia con sede en Tlalnepantla, y Director de la Policía Judicial del Estado de México.

21. Copia simple del oficio OC.211.04.197.950 de fecha 14 de noviembre de 1995, a través del cual la Subprocuraduría de Justicia con sede en Tlalnepantla, México, solicitó al Lic. Luis Conrado Flores Vázquez, Procurador General de Justicia del Estado de Aguascalientes, la colaboración para cumplir la orden de aprehensión dictada en contra de Jorge Yáñez Rosalío.

22. Copia certificada del oficio 2112.3 de fecha 15 de noviembre de 1995, a través del cual el Lic. Luis Conrado Flores Vázquez, Procurador General de Justicia de Aguascalientes, informa al quejoso sobre los fundamentos y motivos que propiciaron su aprehensión en esa entidad federativa.

23. Oficio 286/96-2 de fecha 8 de enero de 1996, por el cual se solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Estado informe relativo a la fecha en que esa Dependencia fue notificada de la suspensión provisional o definitiva dictada en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 194/95, seguido por el señor Jorge Yáñez Rosalío.

24. Acta circunstanciada de fecha 18 de enero de 1996, mediante la cual se hizo constar la recepción de diversas documentales relativas al incidente de suspensión del juicio de amparo 194/95, instrumentado ante el actual Juzgado Tercero de Distrito con residencia en Naucalpan, México.

25. Oficio CDH/PROC/211/01/603/96 de fecha 7 de febrero de 1996, a través del cual la Procuraduría General de Justicia del Estado de México remitió el informe instado en el similar 286/96-2 del 8 de enero del mismo año, girado por esta Comisión.

26. Copia certificada de las averiguaciones previas TLA/III/8128/93 y TLA/I/5292/94.

27. Copia certificada de la causa 124/95-2.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

En fecha 19 de noviembre de 1993, el agente del Ministerio Público adscrito al tercer turno de Tlalnepantla, México, inició la averiguación previa TLA/III/8128/93 por denuncia de hechos presentada por Alberto Sansores Manzanilla en contra de Jorge Yáñez Rosalío. Fundamentalmente, el denunciante refiere la posible comisión del delito de uso de documento falso, al desconocer la firma y contenido insertos en un contrato privado de promesa de compraventa de fecha 15 de enero de 1983, respecto de un bien inmueble ubicado en lote cuatro, manzana seis,

colonia tabla honda, San Bartolo Tenayuca, Tlalnepantla, México, en el cual aparece como promitente comprador Jorge Yáñez Rosalío.

Previos los trámites que el agente del Ministerio Público juzgó necesarios, el día 7 de enero de 1994 acordó enviar la indagatoria al Procurador General de Justicia del Estado de México, estimando que era procedente no ejercitar acción penal en contra del indiciado en virtud de que los hechos denunciados, a su criterio, no eran constitutivos de delito. El razonamiento que fundamentó el no ejercicio de la actio, se basó en el Juicio de Usucapión de número 1735/92 seguido ante el Juez Primero de lo Civil de Tlalnepantla, México, por el quejoso en contra del señor Alberto Sansores Manzanilla, en el cual aparecía que la sentencia que resolvía el mismo había causado ya ejecutoria, por lo que el Representante Social consideró que se trataba "de un asunto puramente civil". En fecha 4 de febrero de 1994, el Subprocurador de Justicia con residencia en Tlalnepantla, México, autorizó el no ejercicio de la acción penal.

Posteriormente, en fecha 20 de julio de 1994, el agente del Ministerio Público adscrito a la mesa cuatro, primer turno, en Tlalnepantla, México, dio inicio a la indagatoria TLA/I/5292/94, motivado por la denuncia de hechos formulada en contra de Jorge Yáñez Rosalío por Alberto Sansores Manzanilla. Al igual que en su primer delación, el denunciante considera la posible

comisión del delito de uso de documento falso, fundando su acusación en hechos esencialmente iguales; es decir, en haber utilizado el contrato privado promisorio de compraventa referido a fin de obtener la propiedad del bien inmueble descrito en el primer párrafo de este apartado.

En la indagatoria referida TLA/I/5292/94, el agente del Ministerio Público recabó como medios de prueba, entre otros, un dictamen pericial en materia de grafoscopia de fecha 7 de marzo de 1995, signado por la perito oficial Adriana Patricia Barrios Solís, constituyéndose como elemento del examen y confrontación una copia fotostática certificada referente a un contrato promisorio de compraventa (descrito en el primer párrafo de este apartado), mismo que obraba en las actuaciones del juicio de amparo 972/93, promovido por Alberto Sansores Manzanilla ante el entonces Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México.

En el dictamen rendido por la perito oficial, sus conclusiones se condicionan a ratificación o rectificación en tanto se le proporcione el documento original motivo del cotejo, circunstancia que no fue óbice para que el representante social considerara que dicha prueba, aunada a la que sobre idénticas bases rindiera el perito particular Antonio Flores Mata, en dictamen de fecha 15 de julio de 1994; reunía los requisitos de existencia, validez y eficacia probatoria, que sustentaron su

determinación de consignación de la indagatoria ante la autoridad judicial.

En fecha 20 de abril de 1995, el Representante Social determinó ejercitar acción penal en contra del señor Jorge Yáñez Rosalío, por aparecer como presunto responsable de uso de documento falso, en agravio de la fe pública y de Alberto Sansores Manzanilla, consignando la indagatoria al Juez Segundo de lo Penal de Tlalnepantla, México, agregando, como parte de las actuaciones practicadas, copia certificada solamente de 28 de las más de mil fojas que integraban la averiguación previa TLA/III/8128/93, antecedente inmediato de la averiguación objeto de la consignación.

Radicada que fue la averiguación previa bajo el número de causa 124/95-1, en fecha 10 de mayo de 1995, el Juez del conocimiento dictó orden de aprehensión en contra del indiciado, misma que fue objeto de juicio de garantías ante la entonces Juez Sexto de Distrito en el Estado con residencia en Naucalpan, México, correspondiéndole el número 194/95, y no obstante la vigencia de las resoluciones interlocutorias de fechas 14 y 27 de junio de 1995 (notificadas a esa Dependencia los días 20 de junio y 10 de julio del mismo año, respectivamente), dictadas por dicha Juez Federal que protegía la libertad personal del quejoso, el día 15 de noviembre de 1995, en el Estado de Aguascalientes, el señor Jorge Yáñez Rosalío fue privado de su libertad por

elementos de la Policía Judicial de esta Entidad Federativa, en base al oficio de colaboración número OC. 211. 04. 197. 95 de fecha 14 de noviembre de 1995, girado por la Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla, México, a la Procuraduría General de Justicia de Aguascalientes, México.

IV. OBSERVACIONES

Esta Comisión de Derechos Humanos se allegó de las constancias necesarias descritas en los capítulos de hechos y evidencias y, previo su estudio lógico - jurídico, se colige que servidores públicos adscritos a esa Procuraduría General de Justicia del Estado de México conculcaron los derechos humanos del señor Jorge Yáñez Rosalío, al incurrir en irregularidades en la prestación del servicio público que tienen encomendado.

Ciertamente, el Lic. Luis Carlos Díaz García, agente del Ministerio Público adscrito a la mesa cuatro del primer turno de Tlalnepantla, México, al integrar la averiguación previa TLA/I/5292/94, recabó las pruebas que consideró pertinentes para el efecto de llevar a cabo la determinación correspondiente, probanzas entre las que se cuentan la copia certificada de las actuaciones del juicio de amparo 972/93, promovido por Alberto Sansores Manzanilla ante el entonces Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México; así como los dictámenes en materia de grafoscopia de fechas 15 de julio de 1994 y 7 de marzo de 1995,

emitidos por los peritos Antonio Flores Mata y Adriana Patricia Barrios Solís, ésta última perito oficial, dictámenes periciales condicionados a posterior cotejo con la firma manuscrita del documento original; sin embargo, el servidor público en cita considera que dichas probanzas reunían los requisitos de existencia, validez y eficacia probatoria para tener por reunidos los elementos del tipo penal de uso de documento falso, no obstante que en ambas pruebas el elemento de cotejo se hizo consistir en una copia fotostática certificada del contrato privado de promesa de compraventa de fecha 15 de enero de 1983, y no con el original como lo regula la técnica de dicha pericia.

A mayor abundamiento, al rendirse el dictamen, el mismo perito oficial condiciona sus conclusiones a ratificación o rectificación según se cuente con el documento original motivo del cotejo, situación lógica, toda vez que el examen y la confrontación de las firmas debe llevarse a cabo precisamente entre la original de la firma dubitada y aquella que use normalmente la persona en todos sus asuntos, para así estar en aptitud de establecer técnicamente las peculiaridades y disimilitudes de la escritura en cuestión; lo que significa que, previo al ejercicio de la acción penal, el Representante Social debió haberse allegado del original del documento, indispensable para tener por acreditados los elementos del tipo penal, máxime que en el caso se trataba de determinar la autenticidad

de la firma de un documento, constituyéndose la pericial multicitada como la prueba técnica idónea para ese efecto.

En este sentido, cabe anotar que la irregularidad descrita repercute en la debida integración de la averiguación previa, situación que desde luego incide en la adecuada impartición de justicia, derecho fundamental y pilar esencial del Estado de Derecho en el cual convive y se desenvuelve nuestra sociedad mexicana.

Asimismo, la Circular 59 de fecha 12 de agosto de 1991, emitida por el Procurador General de Justicia del Estado de México y de observancia obligatoria para el agente del Ministerio Público del caso, señala que "Para optimizar los resultados de la función persecutoria del delito, esta Procuraduría cuenta con importante área de peritos con rango de Dirección; con el fin de que las averiguaciones previas se sustenten con bases científicas y de esta misma manera prosperen las que se consignen ante la autoridad judicial.", indicando su segundo párrafo "Los agentes del Ministerio Público que en averiguación ordenen o ante el juzgador ofrezcan como medio de prueba el dictamen de peritos en alguna ciencia, técnica o arte; cuidarán de que se reúnan los requisitos de existencia, de validez y eficacia probatoria ..."; circular que no es cumplimentada debidamente por el servidor público encargado de la investigación de los delitos al momento

de integrar la indagatoria correspondiente.

En el mismo orden de ideas, la circular número 101 de fecha 15 de febrero de 1993, señala en su último párrafo, lo siguiente: "Para que en la práctica de averiguaciones previas se logre una coordinación óptima entre agentes del Ministerio Público y peritos, la 'Guía de elementos básicos para elaboración de dictámenes' detalla en qué materias y qué tipo de peritajes pueden solicitarse, en forma regular, sin perjuicio de que se pueda designar un perito especial en alguna materia con la que no cuente la institución (se anexa guía)."

En la correspondiente guía, en el punto 2, "Grafoscopía", entre los requisitos señalados para solicitar el peritaje se encuentra enunciado lo siguiente: "Oficio dirigido a la autoridad o institución bancaria a efecto de que se dé acceso al Expediente en caso de no tener a la vista los documentos originales cuestionados."

De lo anterior se desprende la necesidad de contar con el original del documento motivo del cotejo, a fin de tener los elementos indispensables que acrediten justificadamente los elementos del tipo y la responsabilidad que probablemente le resulte al inculpado, ya que, conforme al artículo 166 del Código de procedimientos Penales vigente en esta Entidad Federativa, estos se constituyen como presupuesto indispensable para el sano ejercicio de la acción penal, en

aras de una prestación debida del servicio público en la procuración de justicia.

Además, es de hacerse notar que la copia certificada del contrato promisorio de compraventa que fue utilizada como elemento del cotejo de la prueba pericial, devenía de la copia certificada del juicio ordinario civil 1735/92-3 (seguido en el Juzgado Primero Civil de Tlalnepantla, México, por el señor Jorge Yáñez Rosalío en contra de Alberto Sansores Manzanilla), que había sido ofrecida como prueba por parte del aquí quejoso en el juicio de amparo 972/93 (seguido en el entonces Juzgado Quinto de Distrito del Estado, por el señor Alberto Sansores Manzanilla en contra de actos del Juez Primero de lo Civil de Tlalnepantla, México y en el cual aparecía como tercero perjudicado el señor Jorge Yáñez Rosalío), del cual, a su vez, se había obtenido, por parte del ofendido en la averiguación previa TLA/I/5292/94, copia certificada para ser exhibida en dicha indagatoria; de lo que se desprende que la fotostática que sirvió de base para el desahogo de la prueba pericial, ni siquiera era inmediata a su original, sino que devenía de la copia, al menos, de otra fotostática, situación que fortalece, aún más, los razonamientos que preceden.

No pasa desapercibido para esta Comisión, el hecho de que si bien es cierto que la prueba pericial fue solicitada en fecha 26 de enero de 1995 por el Representante Social, al

Delegado de Servicios Periciales en Tlalnepantla, México, también lo es que el dictamen se rindió el 13 de marzo del mismo año, y por cuanto hace a la circular 101 referida fue emitida en fecha 15 de febrero de 1995, por lo que no existe excusa que justifique la inobservancia de esta circular por parte del servidor público adscrito a esa Procuraduría.

Refuerza el criterio, la tesis de jurisprudencia sostenida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vista en el apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 205-216, página 147; cuya sinopsis refiere:

PRUEBA PERICIAL GRAFOSCOPIA, VALORACIÓN DE LA. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). No obstante que según el artículo 410 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco el Juez está facultado para valorar la prueba parcial, según su prudente arbitrio: tratándose de la prueba pericial grafoscópica, debe desestimar los dictámenes que no se ajusten al interrogatorio formulado a los peritos y éstos, al contestar las preguntas respectivas, tendrán que examinar y confrontar el original de la firma dubitada y expresarlo así en sus dictámenes, por que no basta el examen y confrontación con una copia fotostática de esa firma, dado que es obvio que se aprecian con mejor pericia las características de la firma en el original que en la copia fotostática de la misma; además, los dictámenes,

para ser tomados en cuenta, se referirán precisamente al juicio que se ofreció esa prueba y no a otro. Por otra parte, si la firma dubitada consiste en el nombre de una persona, debe tenerse como indubitable no sólo la rúbrica que según dicha persona use normalmente en todos sus asuntos que requieran de ella, sino que también es necesario tener como indubitable aquella consistente en la escritura de su nombre, con su puño y letras, para la confrontación respectiva, y así poder establecer técnicamente las características y diferencias de dicha escritura.

Precedentes: Amparo directo 7916/85. Gloria Varela Sensión y Mayra Clarisa Cárdenas Varela. 20 de agosto de 1986. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Jorge Olivera Toro.

Es de hacerse notar que en fecha 3 de agosto de 1994, el señor Alberto Sansores Manzanilla, ofendido en la indagatoria, presentó al Lic. Luis Carlos Díaz García, agente del Ministerio Público adscrito a la mesa cuatro del primer turno de Tlalnepantla, México, un conjunto de probanzas tendentes a demostrar los extremos de su denuncia, entre las cuales figuraba copia certificada de la averiguación previa TLA/III/8128/93, constante de 28 fojas útiles inscritas en una sola de sus caras, situación que colocó al Representante Social en la aptitud de conocer sobre la preexistencia de una indagatoria fundada en los mismos hechos, personas y circunstancias que la que tramitaba y, de la misma

manera, sobre el antecedente de la autorización del no ejercicio de la acción penal en ésta; sin embargo, el agente del Ministerio Público omite allegarse de la precitada indagatoria (que se encontraba en archivo), máxime que no solamente se integraba por 28 fojas, sino que sus actuaciones excedían las mil; situación indispensable para soportar con los elementos suficientes, en su caso, la consignación correspondiente, previa la valoración de rigor de todas y cada una de las constancias recabadas en la averiguación de los hechos. A mayor abundamiento, derivado de la preexistencia de la indagatoria TLA/III/8128/93 (y de su inmediata relación con la que se integraba), en aras de la debida integración de la averiguación previa y a fin de dotar al Juzgador de los elementos de prueba suficientes que lo ilustrasen en el momento de emitir el fallo que en derecho procediese, en todo caso, el Representante Social debió considerar la reapertura de la averiguación previa precitada, mediante acuerdo fundado y motivado, a efecto de acumular a ésta la similar TLA/I/5292/94, a fin de que, en la determinación correspondiente, se razonara sobre la procedencia del ejercicio de la actio (desde el punto de vista de la previa existencia de su no autorización); situación que no se hizo.

Señala el señor Jorge Yáñez Rosalío que el día 15 de noviembre de 1995 fue privado de su libertad en el Estado de Aguascalientes por elementos de la Policía Judicial del Estado de México, derivado de la cumplimentación de la

orden de aprehensión dictada en contra del mismo por el Juez Segundo de lo Penal de Tlalnepantla, México, en la causa 124/95, sin considerarse que la constitucionalidad de dicha orden estaba siendo cuestionada por la entonces Juez Sexto de Distrito en el Estado de México, misma que, en fechas 14 y 27 de junio de 1995, dictó interlocutorias que suspendían la ejecución de la orden de aprehensión en cita, las cuales fueron notificadas a esa Procuraduría los días 20 de junio y 10 de julio de 1995, respectivamente. Al respecto, es necesario hacer notar que por oficio CDH/PROC/211/01/603/96 de fecha 7 de febrero de 1996, la Procuraduría General de Justicia de esta Entidad Federativa comunicó a este Organismo, la iniciación del procedimiento correspondiente para determinar la responsabilidad administrativa de los servidores públicos adscritos a esa Dependencia que hubiesen intervenido en los hechos en comento, situación por la cual esta Comisión se abstiene de emitir observación alguna al respecto.

Por otra parte, no pasen desapercibidas para esta Comisión, las manifestaciones vertidas por el señor Jorge Yáñez Rosalío en el sentido de que, no obstante que en la averiguación previa TLA/III/8128/93 instrumentada por el delito de uso de documento falso en agravio de Alberto Sansores Manzanilla y en la cual aparece como indiciado el señor Jorge Yáñez Rosalío, se había autorizado, previos los requisitos legales, el no

ejercicio de la acción penal; el agente del Ministerio Público adscrito a la mesa cuatro, primer turno, de Tlalnepantla, México, dio inicio a la indagatoria TLA/I/5242/94 en la cual se surte identidad de personas y hechos, consignándose ésta última al Juez Penal correspondiente; sin embargo, este Organismo no produce observación alguna al respecto, acorde a los razonamientos que a continuación se producen.

Señalan los artículos 125, 169, 170, 171 y 172 de la Ley Adjetiva Penal vigente en esta Entidad Federativa: Artículo 125. Cuando en vista de la averiguación previa el agente del Ministerio Público estime que no es de ejercitarse la acción penal por los hechos que se hubieren denunciado como delitos o por los que se hubiere presentado querrela, dictará resolución haciéndolo constar así, y remitirá, dentro de las cuarenta y ocho horas, el expediente al Procurador General de Justicia o al Subprocurador que corresponda, quienes con la audiencia de los agentes auxiliares decidirán, en definitiva, si debe o no ejercitarse la acción penal ...

Artículo 169. El Ministerio Público no ejercitará acción penal:

I. Cuando los hechos de que conozca, no sean constitutivos del delito.

II. Cuando, aun pudiendo serlo, resulta imposible la prueba de la existencia de los hechos.

III. Cuando esté extinguida legalmente, y

IV. Cuando exista plenamente comprobada alguna excluyente de incriminación.

Artículo 171. El Ministerio Público solamente puede desistirse de la acción penal:

I. Cuando durante el procedimiento resulte que los hechos no son constitutivos de delito, y

II. Cuando durante el procedimiento judicial aparezca plenamente comprobado en autos que el inculpado no ha tenido participación en el delito que se persigue, o no exista en su favor alguna causa excluyente de incriminación; pero solamente por lo que se refiere a quienes se encuentren en estas circunstancias.

Artículo 172. Las resoluciones que se dicten en los casos a que se refieren los dos artículos anteriores, producirán el efecto de impedir definitivamente el ejercicio de la acción penal respecto de los hechos que la motiven.

Artículo 173. Para que el desistimiento de la acción penal produzca el efecto señalado en el artículo anterior, deberá ser formulado expresamente y de acuerdo con los requisitos fijados en este código y en el Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia.

Correspondiendo al Ministerio Público el monopolio del ejercicio de la acción

penal, acorde a lo dispuesto por el artículo 168 de la Ley Adjetiva de la materia vigente en esta Entidad Federativa, su no ejercicio se constriñe a las cuatro fracciones que señala el artículo 169 del mismo ordenamiento, empero, previa la cumplimentación de los requisitos legales, la resolución por la que ésta se autorice no produce el efecto de impedir definitivamente el nuevo ejercicio de la acción penal respecto de los hechos que la hayan motivado, aunque, bien es cierto, este nuevo ejercicio estará condicionado a la existencia de nuevos elementos de prueba que presuman la responsabilidad penal del indiciado, toda vez que el efecto que consagra el artículo 172 de la Ley en cita, es exclusivo del desistimiento de la acción penal multicitada.

Efectivamente, acorde al contenido del artículo 171 de la multireferida ley, el desistimiento de la acción penal opera durante el procedimiento judicial, es decir, una vez ejercitada la misma y consignada la indagatoria al Juez correspondiente, por encuadrarse alguno de los supuestos que dicho numeral prevé para con el caso, siendo su definitividad avalada por una resolución jurisdiccional, tal cual es la de sobreseimiento que, conforme a los artículos 296 fracción II, 297 y 299 del Código de Procedimientos Penales vigente, surtirá los efectos de una sentencia absolutoria y, una vez ejecutoriada, tendrá la autoridad de cosa juzgada; por lo que en ese caso, un nuevo ejercicio de la acción penal, por los mismos hechos, desde luego

sería conculcatorio a derechos humanos, a la luz de lo dispuesto por el artículo 23 de la Constitución General de la República; situación jurídica que desde luego difiere a la que se surte para con el caso a estudio del señor Jorge Yáñez Rosalío.

En estas condiciones, sí se presentan nuevos elementos de prueba para la integración de la indagatoria, no obstante la autorización previa del no ejercicio de la acción penal, es evidente que el órgano de investigación se encuentra en la posibilidad de reabrir el expediente y determinar sobre su ejercicio.

En este orden de ideas, el Lic. Luis Carlos Díaz García, agente del Ministerio Público adscrito a la mesa cuatro del primer turno de Tlalnepantla, México, transgredió con su omisiones, los siguientes preceptos jurídicos:

A) De la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios:

Artículo 42. Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban ser observadas en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio o independientemente de sus derechos y deberes laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general:

I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión.

XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público.

XXIV. Las demás que le impongan las leyes y disposiciones reglamentarias o administrativas.

Artículo 43. Se incurre en responsabilidad administrativa por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, dando lugar a la instrucción del procedimiento administrativo ante los órganos disciplinarios y a la aplicación de las sanciones que en esta Ley se consignan, atendiendo a la naturaleza de la obligación que se transgreda.

B) Circulares de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México:

Circular 1 de fecha 5 de diciembre de 1988. Las circulares en tanto disposiciones de carácter interno, contienen lineamientos obligatorios que definen y clarifican objetivos de la institución para el mejor funcionamiento de la misma.

Ahora bien, como en administraciones anteriores se han dictado circulares de observancia general, éstas continúan vigentes y por lo tanto deberán acatarse en tanto no se dejen sin efecto o sean sustituidas por otras.

Circular 59 de fecha 12 de agosto de 1991. El desarrollo de ciencias y modernas tecnologías hacen de la actividad pericial un valioso auxiliar de la procuración y administración de justicia.

Para optimizar los resultados de la función persecutoria del delito, esta procuraduría cuenta con importante área de peritos con rango de Dirección; con el fin de que las averiguaciones previas se sustenten con bases científicas y de esta misma manera prosperen las que se consignen ante la autoridad judicial.

Los agentes del Ministerio Público que en averiguación ordenen o ante el juzgador ofrezcan como medio de prueba el dictamen de peritos en alguna ciencia, técnica o arte; cuidarán de que se reúnan los requisitos de existencia, de validez y eficacia probatoria, por lo que siempre atenderán:

- a) Que se cumplan las formalidades del procedimiento.
- b) Que la prueba sea atingente y oportuna.
- c) Planteando las cuestiones concretas sobre las que debe versar enunciando

los fundamentos legales, explicando los motivos y fines de la misma cuantas veces sea pertinente -evitando las revisiones oficiosas-

d) Que el dictamen sea congruente con la solicitud, sustentando sus conclusiones en los principios y métodos de la ciencia, técnica o arte de que se trate ...

Por ser el peritaje una prueba colegiada, con valor probatorio de indicio, es necesario que se aporten todos los medios de prueba en cada caso, para que el Ministerio Público en la averiguación y el juzgador en la instrucción, al hacer el enlace lógico de las pruebas aportadas, emita su resolución.

Circular 101 de fecha 15 de febrero de 1995. Para que en la práctica de averiguaciones previas se logre una coordinación óptima entre agentes del Ministerio Público y peritos, la 'Guía de elementos básicos para elaboración de dictámenes' detalla en qué materias y qué tipo de peritajes pueden solicitarse, en forma regular, sin perjuicio de que se pueda designar un perito especial en alguna materia con la que no cuente la institución (se anexa guía). [último párrafo].

Por lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, respetuosamente formula a usted, señor Procurador General de Justicia del Estado, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva ordenar a quien corresponda, el inicio del procedimiento administrativo en contra del agente del Ministerio Público adscrito a la mesa cuatro del primer turno de Tlalnepantla, México, por la irregularidad en el cumplimiento de su función pública, según lo apuntado en este documento, a fin de que, en su oportunidad y de considerarlo procedente, sea emitida la sanción que conforme a derecho corresponda.

SEGUNDA: De acuerdo con el artículo 50, segundo párrafo, de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, solicito a usted que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, nos sea informada dentro de un término de 15

días hábiles siguientes a la notificación de la presente.

Con fundamento en el mismo precepto legal, solicito que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la Recomendación se envíen a este Organismo durante los quince días hábiles siguientes a la fecha de aceptación de la presente.

La falta de presentación de pruebas dará lugar a que se interprete que la presente Recomendación no fue aceptada, quedando la Comisión de Derechos Humanos del Estado en libertad de hacer pública esta circunstancia. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 102, Apartado B, de la Constitución General de la República, y 16 de la Particular del Estado, tiene el carácter de pública.

A T E N T A M E N T E
DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MÉXICO

**Gobierno del Estado de México
Procuraduría General de Justicia**

OFICIO: 213004000/3713/96
Toluca, Estado de México
agosto 28 de 1996

Doctora

MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México
Presente.

En respuesta a su atento oficio del día 19 de agosto del año en curso, mediante el cual hace del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION 54/96, emitida por el H. Organismo que usted dignamente representa y motiva por la queja CODHEM/1976/95-2 presentada por JORGE YAÑEZ ROSALIO, le informo:

La misma es aceptada en términos del Artículo 50 Párrafo Segundo de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y a la brevedad posible le será remitida la documentación que acredite su debido cumplimiento.

Sin otro particular por el momento le reitero mi distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E
LIC. LUIS ARTURO AGUILAR BASURTO
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA

C.c.p. LIC. CÉSAR CAMACHO QUIROZ. Gobernador del Estado de México
LIC. RAÚL VERA AGUILAR. Subprocurador General de Justicia
LIC. JOSEFINA GUTIERREZ ESPINOZA. Coordinadora de Derechos Humanos.
LAABJGESPLBjbsg.